

C.A. de Santiago

Santiago, veinte de enero de dos mil veintitrés.

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones:

i.- Se eliminan los considerandos “Duodécimo”; los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del motivo “Décimo Tercero”; “Décimo Sexto”.

ii.- En el fundamento “Décimo Séptimo”, se suprime la frase *“la suma regulada se reajustara conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia (-)”*.

Y teniendo, en su lugar y además presente:

I.- En cuanto al recurso de apelación de la demandada:

Primero: Que en cuanto a la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria alegada por el Fisco de Chile, cabe indicar que, efectivamente, esta sí es prescriptible, pues no hay ningún cuerpo normativo -nacional o internacional- que lo establezca, resultando aplicables las normas de derecho común del Código Civil. En efecto, argüir lo contrario, importaría el establecimiento jurisprudencial de acciones imprescriptibles, en contra de texto expreso de la ley, en este caso, del artículo 2497 del Código Civil, que dispone que: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, las iglesias, municipalidades, establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.”*



Segundo: Que, así también, es pertinente aplicar -al caso concreto-, las figuras implícitas en dicha institución, como son la suspensión, interrupción, renuncia de la prescripción, entre otras, que contempla el mismo cuerpo de leyes.

Tercero: Que, al efecto; y respecto de la renuncia a la prescripción, el artículo 2494 del Código Civil dispone que:

"La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida. Renunciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazo".

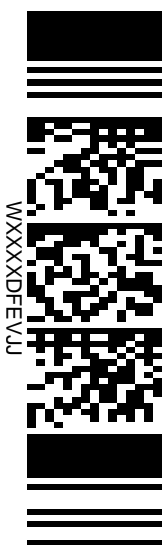
Además, para que pueda determinarse la existencia de la misma, se requiere que la intención de renunciar sea inequívoca, es decir, que se desprenda de un hecho que suponga necesariamente el abandono de un derecho adquirido a través de actos concretos del deudor.

Cuarto: Que, esta es la situación que ha ocurrido en el caso en análisis, pues el Estado demandado, ha reconocido su condición de deudor para con las víctimas de prisión política y tortura, constituyendo un acto de renuncia a la prescripción. En efecto, existe en concepto de estos jueces, un acto relevante de reconocimiento expreso del Estado en esta materia; y es lo expresado en la contestación efectuada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de la demanda que interpusieran en su contra, en el caso: “María Laura Ordenes Guerra y otros respecto de la República de Chile”, al manifestar



que: *“al no existir controversia sobre el objeto principal de este litigio internacional, lo que procede es reestablecer los derechos que se han tenido por vulnerados y determinar el pago de la indemnización a la parte lesionada”*. Así, *“previo a la declaración de medidas de reparación que adopte [esta] Corte, es importante para el Estado formular los siguientes alcances: En primer lugar, las causas judiciales a que se ha hecho referencia a nivel interno han sido tramitadas completamente y las decisiones pronunciadas cuentan con el carácter de cosa juzgada, lo que hace imposible jurídicamente restituir los procesos judiciales para dictar nuevas sentencias.”* (...) *“No obstante, el Estado comparte que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de las medidas de reparación a ser adoptadas por [la] Corte, tornando en cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una indemnización monetaria (...)”*.

Quinto: Que así entonces, no es posible, luego de reconocer expresamente el Estado de Chile, ante un Tribunal Internacional



que la acción civil indemnizatoria no es prescriptible, que en el Derecho Interno, éste mantenga tales alegaciones e incluso impugne el fallo de primer grado que desestimó la excepción de prescripción a la que renunció expresamente, al sostener, que el transcurso del tiempo, no permite que la víctima o sus familiares puedan ser reparados en forma integral, por el daño causado por agentes del Estado.

Sexto: Que, en cuanto al daño moral, el actor en su demanda, describe las conductas en las que sustenta el perjuicio, como las torturas que le fueron infligidas por agentes del Estado, -mientras lo mantuvieron detenido por un mes, en el Estadio Español y Estadio Nacional-, tanto físicas como psicológicas, traducidas en amedrentamiento, golpes y maltratos, que lo dejaron con la nariz y dos dientes fracturados, a más, de interrogatorios donde se le aplicaba descargas eléctricas en partes sensibles de su cuerpo, lo que produjo que desarrollara depresión y problemas de alcoholismo.

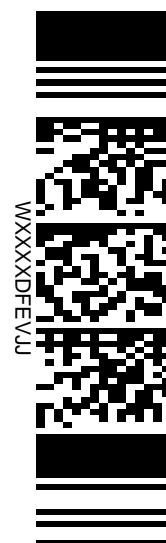
Séptimo: Que la sentenciadora, al efecto, tuvo por acreditado el daño moral sufrido por el actor, en especial, considerando el documento privado, consistente en un informe -no objetado- elaborado por la psicóloga doña Carolina Canales Cortés, -sin fecha-, el que apreciado de acuerdo a lo previsto en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, permite, estimar, que los acontecimientos vividos en el pasado, lo dejaron deteriorado psicológicamente, hasta la fecha. Conclusión, que encuentra refuerzo, en los antecedentes, de público conocimiento, recopilados en el Informe de la denominada Comisión Valech, en cuya nómina de víctimas, se encuentra el demandante.



Octavo: Que en este escenario, resulta dable tener por acreditado el daño moral que se reclama en autos, -como lo establece la Juez *a quo*-, un daño que si bien no es cuantificable de manera pecuniaria, desde el punto de vista de la justicia, la lesión de bienes valiosos como lo son la vida, la salud, el honor, justifican la indemnización de los mismos, toda vez, que el daño moral, es consecuencia de la afectación que deriva de los quebrantos y privaciones de tales intereses.

Noveno: Que así entonces, la valoración de este daño no patrimonial, opera como una compensación económica por el sufrimiento padecido por el demandante, y no como reparación de los mismos, lo que permite descartar las alegaciones que el demandado hace en relación a que las reparaciones que en reconocimiento a estos hechos ha efectuado el Estado, por cuanto, aquellas no son equivalentes al resarcimiento del daño moral sobrellevado por el agraviado en particular.

De manera, que en la especie, -en que el *a quo*, lo ha determinado en la suma de \$ 30.000.000 (treinta millones)-, atendida la entidad del agravio producido, el daño moral ha de cuantificarse, considerando su extensión, y gravedad, teniendo en consideración las circunstancias, padecimientos, torturas físicas y psicológicas sufridas, y el tiempo que el demandante estuvo detenido; por lo que, al respecto ha de tenerse en cuenta que la función compensatoria de la indemnización, no sustituye el bien afectado, ni tiene por objeto situar a la víctima en una situación semejante a la que tenía antes de producirse el perjuicio, sino procurar una finalidad satisfactoria, que de manera equitativa lo beneficie, examinando la gravedad del ilícito; de manera que, habrá de



delimitarse dicho monto, de modo, que proporcionalmente satisfaga los dolores, aflicciones, y las secuelas traumáticas producto de los ilícitos de que fue objeto el demandante, el que se estima prudencialmente en la suma de \$ 15.000.000 (quince millones de pesos).

Décimo: Que en lo tocante a los reajustes, y dada la finalidad de su aplicación, cual es, el dotar de actualidad al monto dinerario, que se conceda en definitiva, evitando su desvalorización en relación a la época en que fue demandada su declaración y obligación al pago por el demandado, la suma que se determinará en lo resolutive, deberá solucionarse aplicando el reajuste de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, desde que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo.

II.- En cuanto a la apelación del demandante:

Undécimo: Que el demandante recurre de apelación, en contra del fallo que se revisa, solo en cuanto, solicita se eleve el monto a indemnizar a la suma de \$ 300.000.000, y se condene en costas a la demandada.

Duodécimo: Que como se ha venido razonando, en los motivos precedentes, en particular el fundamento noveno, habrá de desestimarse tal petición, por cuanto, lo fijado en el motivo noveno de esta resolución, se aviene con el dolor y aflicción sufrido por el actor como se ha acreditado y valorado.

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, ***se confirma***, la sentencia de ocho de abril de dos mil veintidós, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, con las siguientes declaraciones:



I.- Que se reduce la indemnización por daño moral, a la suma de \$ 15.000.000 (quince millones de pesos), con los intereses consignados en la sentencia de primera instancia.

II.- Que los reajustes aplicables al monto a indemnizar, lo serán desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta el pago efectivo, en la forma dispuesta en el motivo décimo.

Se previene que la ministra Lilian Leyton Varela no comparte lo razonado en los considerandos primero a quinto, pues en su opinión la acción que se dedujo resulta imprescriptible, por las siguientes razones:

1º.- Que cabe recordar que en los sucesos reseñados y que constituyen el fundamento de la acción, intervinieron agentes del Estado, lo que evidencia una contravención a lo preceptuado en el artículo 6º de la Constitución Política de la República que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a ella y las normas dictadas conforme a la misma y al artículo 5º de nuestra Constitución, en cuanto a que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; siendo deber de aquellos respetar y promover tales derechos garantizados. Esta última disposición constitucional, como se dijo, hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; que, en consecuencia, adquiere rango constitucional. En este sentido e incluso incurriendo en reiteración, debe ponerse de relieve que toda la normativa internacional aplicable en la especie por mandato constitucional, que propende a la reparación integral de las víctimas, ciertamente



incluye el aspecto patrimonial. Por ello, al tratarse en autos de una demanda civil que se sustenta en un delito que, de acuerdo a la conciencia jurídica se denomina de “lesa humanidad”, es dable concluir que tal calificación no solo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito y declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito cuya existencia ha sido indiscutida.

2º.- Que, en consecuencia, en este tipo de delitos cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, pues tal interpretación contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, por lo que resulta contrario a derecho declarar prescrita la acción intentada por la actora contra el Estado de Chile.

3º.- Que en tal orden de consideraciones, la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema reconocida en los autos Rol 22.856-2015, de fecha 29 de diciembre de 2015 ha señalado que *“tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie- cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa*



internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.”



4º.- Que por lo expuesto, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios invocadas por el Fisco de Chile, de manera que solo cabe desestimar la excepción de prescripción que este opuso, pero por las razones contenidas en esta prevención.

5º.- Que, en resumen, solo resta concluir la procedencia de la indemnización que se reclama, atendiendo al contexto en que se verificaron los delitos, esto es, en un momento de extrema anormalidad institucional, en que los hechores -agentes del Estado- en representación del gobierno de la época, como quedó asentado en el proceso, ejecutaron ilícitos tal gravedad, que imponen al Estado de Chile la obligación de resarcir el daño causado, tal como se desprende del bloque normativo integrado, entre otros, por el Reglamento de La Haya de 1907, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, que en su conjunto consagran el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, imponiendo tal resarcimiento al respectivo Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina y de la prevención, su autora.

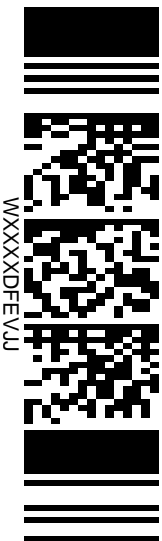
Ingreso Corte Civil N° 11723 - 2022.-



Pronunciada por la **Primera Sala** de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por las Ministras señora Lilian Leyton Varela, y señora Inelie Duran Madina.

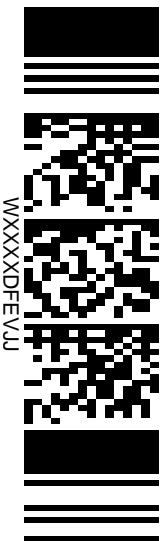
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinte de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M., Lilian A. Leyton V., Inelie Duran M. Santiago, veinte de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veinte de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.